

**JUZGADO SEGUNDO CIVIL DE PEQUEÑAS CAUSAS Y COMPETENCIA
MÚLTIPLE DE POPAYÁN CAUCA**

AUTO NO. 2515

Popayán, treinta (30) de noviembre de dos mil veintiuno (2021).

Notificado por anotación en estado No. 130 del 01 de diciembre de 2.021

Radicado N°	2021-00320-00
Proceso:	EJECUTIVO SINGULAR
Demandante:	MARCELA SILVA ROLDÁN
Demandado:	ISABELLA CALDERON HERNANDEZ y BERTHA LUCY HERNANDEZ

ASUNTO A TRATAR:

Se resuelve en esta oportunidad el recurso de reposición y en subsidio apelación presentado por la parte demandante actuando a nombre propio, contra el auto no. 0926 del 27 de mayo de 2021, notificado mediante estado 052 del 28 de mayo de 2021 mediante el cual se libró mandamiento de pago a favor de la señora **MARCELA SILVA ROLDAN** y en contra de las señoras **ISABELLA CALDERON HERNANDEZ y BERTHA LUCY HERNANDEZ**, identificadas con las cédulas de ciudadanía Nos. 1.061.760.699 y 34.535.111 respectivamente.

EL RECURSO:

Mediante memorial allegado por correo electrónico, la parte actora manifiesta qué en el auto no. 0926 del 27 de mayo de 2021 mediante el cual se libró mandamiento de pago a favor de la señora **MARCELA SILVA ROLDAN** y en contra de las señoras **ISABELLA CALDERON HERNANDEZ y BERTHA LUCY HERNANDEZ**, se negó la pretensión de la cláusula penal y el valor correspondiente al servicio de recolección de basuras prestado por serviaseo, en razón a que este despacho no consideró los anexos que fueron aportados, los cuales consagran las obligaciones referenciadas.

Manifiesta, además, que en la cláusula novena del contrato de arrendamiento de vivienda urbana se consagró la correspondiente cláusula penal y la obligación del pagar oportunamente los servicios públicos. En este sentido, manifiesta que aporta una vez más el contrato de arrendamiento, aclarando que se anexó en la demanda, conforme a lo consagrado en el artículo 422 del estatuto procesal.

Así las cosas, solicita que se conceda la pretensión del cobro de la cláusula penal, por valor de **\$ 3.511.212**, y el valor del servicio publico de aseo por **\$123.615**.

CONSIDERACIONES:

De conformidad con el artículo 318 del Código General del Proceso, el recurso de reposición procede contra los autos que dicte el juez, para que se revoquen o se reformen, de la siguiente manera:

"Salvo norma en contrario, el recurso de reposición procede contra los autos que dicte el juez, contra los del magistrado sustanciador no susceptibles de súplica y contra los de la Sala de Casación Civil de la Corte Suprema de Justicia, para que se reformen o revoquen.

El recurso de reposición no procede contra los autos que resuelvan un recurso de apelación, una súplica o una queja.

El recurso deberá interponerse con expresión de las razones que lo sustenten, en forma verbal inmediatamente se pronuncie el auto. Cuando el auto se pronuncie fuera de audiencia el recurso deberá interponerse por escrito dentro de los tres (3) días siguientes al de la notificación del auto.

El auto que decide la reposición no es susceptible de ningún recurso, salvo que contenga puntos no decididos en el anterior, caso en el cual podrán interponerse los recursos pertinentes respecto de los puntos nuevos.

Los autos que dicten las salas de decisión no tienen reposición; podrá pedirse su aclaración o complementación, dentro del término de su ejecutoria.

PARÁGRAFO. Cuando el recurrente impugne una providencia judicial mediante un recurso improcedente, el juez deberá tramitar la impugnación por las reglas del recurso que resultare procedente, siempre que haya sido interpuesto oportunamente."

Así las cosas, una vez establecida la procedencia del recurso de reposición este Despacho entra a realizar un estudio de fondo respecto de los argumentos esbozados por la parte demandante.

Conforme a lo establecido en el artículo 422 del Código General del Proceso, para que se soporte válidamente un mandamiento ejecutivo, la obligación que se atribuye al demandado debe ser sometida a un análisis riguroso por parte del juez, en el cual se debe verificar que tal obligación conste en uno o varios documentos declarativos o representativos, que exista certeza sobre la persona que ha extendido o dado la orden de firmar el documento contentivo de la obligación, que su redacción indique el contenido y alcance de la obligación, en forma lógica y evidente, determinando con precisión su objeto, su monto, los intervinientes, el plazo, así como que su cumplimiento o satisfacción sea demandable válidamente y que no exista condición o plazo pendiente, de la siguiente manera:

"Artículo 422. Título ejecutivo. *Pueden demandarse ejecutivamente las obligaciones expresas, claras y exigibles que consten en documentos que provengan del deudor o de su causante, y constituyan plena prueba contra él, o las que emanen de una sentencia de condena proferida por juez o tribunal de cualquier jurisdicción, o de otra providencia judicial, o de las providencias que en procesos de policía aprueben liquidación de costas o señalen honorarios de auxiliares de la justicia, y los demás documentos que señale la ley. La confesión hecha en el curso de un proceso no constituye título ejecutivo, pero sí la que conste en el interrogatorio previsto en el artículo 184."*

Mediante auto no. 0926 del 27 de mayo de 2021 mediante el cual se libró mandamiento de pago a favor de la señora **MARCELA SILVA ROLDAN** y en contra de las señoras **ISABELLA CALDERON HERNANDEZ y BERTHA LUCY HERNANDEZ**, se consideró con respecto a la solicitud de librar mandamiento ejecutivo por la cláusula penal:

"Respecto a la solicitud de librar mandamiento ejecutivo por la cláusula penal, se advierte que tratándose de un proceso ejecutivo no se allega documento privado que provenga del deudor, documento público, inspección o confesión judicial extraprocesal o sentencia que pruebe la exigibilidad del artículo 422 del Código General del Proceso"

Es necesario precisar en consideración a los planteamientos de la demanda y sus correspondientes anexos que el incumplimiento de los demandados en el no pago oportuno de los cánones adeudados generó perjuicios al actor, advirtiendo que en la cláusula novena consagrada en el contrato de

arrendamiento de vivienda urbana suscrito el 1 de enero de 2020, se acordó la suma de 4 salarios mínimos legales vigentes, es decir, **\$3.511.312**.

En este sentido, luego de realizar un análisis sobre la demanda y sus anexos, tenemos que reconocer que el argumento esgrimido por el despacho para negar el mandamiento de pago de la cláusula penal, referente a que *"no se allega documento privado que provenga del deudor, documento público, inspección o confesión judicial extraprocesal o sentencia que pruebe la exigibilidad"*, indiscutiblemente, como lo contempla el artículo 427 del C.G.P, solo se predica para las obligaciones de no hacer y para las obligaciones condicionales, no para las obligaciones sometidas a plazo, tal y como sucede en el presente caso, en donde el contrato de arrendamiento define con precisión con la mora en el pago de los cánones de arrendamiento genera el incumplimiento de dicho pacto.

Para expresarlo de otra manera, resulta inconsistente por parte del despacho exigir documentos para acreditar el incumplimiento del contrato y la consecuente exigibilidad de la cláusula penal, cuando en la misma providencia se está aceptando que el contrato se incumplió y que las obligaciones en el contempladas prestan mérito ejecutivo, razón por la cual, se procederá a modificar el auto recurrido y librar el mandamiento de pago respecto a la cláusula penal deprecada.

De acuerdo a lo anterior se

DISPONE:

REPONER PARA ADICIONAR el auto no. 0926 del 27 de mayo de 2021 mediante el cual se libró mandamiento de pago a favor de la señora **MARCELA SILVA ROLDAN** y en contra de las señoras ISABELLA CALDERON HERNANDEZ y BERTHA LUCY HERNANDEZ el cual quedará de la siguiente manera:

"PRIMERO.-LIBRAR MANDAMIENTO DE PAGO POR LA VIA EJECUTIVA a favor de la señora MARCELA SILVA ROLDAN y en contra de las señoras ISABELLA CALDERON HERNANDEZ y BERTHA LUCY HERNANDEZ, identificadas con las cédulas de ciudadanía Nos.1.061.760.699 y 34.535.11 1 respectivamente, por las siguientes sumas de dinero:

(...)

10. Por la suma de \$3.511.312 por concepto de clausula penal".

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE


VÍCTOR FABIO DE LA TORRE VARGAS
Juez